



RESTRICCIÓN DE DERECHOS EN ESTADO DE EMERGENCIA – DERECHO A LA PROTESTA

La Constitución Política de Colombia en el Capítulo 6 establece los casos en que el presidente de la República puede declarar los ESTADOS DE EXCEPCIÓN. Por la emergencia de la COVID-19, la Presidencia optó por declarar *Un estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional* (DECRETO 417 DE 2020) con base en el artículo 215 de la Carta que señala:

Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. (...)

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo.

A diferencia de los casos de Estado de Guerra Exterior (Art. 212) y Estado de Conmoción Interior (Art. 213) en donde se hace una alusión expresa de la prohibición de suspensión de los derechos humanos y las libertades fundamentales (Art. 214), la declaratoria de Estado de Emergencia (Art. 215) guarda silencio al respecto.

Pero este silencio no implica que la restricción de derechos si sea admitida en la declaratoria de Estado de Emergencia actual, debido a que:

1. El artículo 93 de la Constitución Política en el primer inciso señala la prohibición de la limitación de los derechos humanos reconocidos en tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia.



2. De forma expresa y sin distinguir los tipos de declaratoria de excepción, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos prohíben la suspensión de derechos¹, y de suspenderse, el Estado debe informar a los demás, Estados Parte, por conducto de los Secretarios Generales de las Organizaciones, la restricción de derechos y su justificación.
3. De presentarse una restricción o suspensión de derechos, esta debe ser legal, necesaria, proporcional² y no discriminatoria³.

Por las múltiples restricciones de derechos que se han presentado en todo el mundo por la propagación del virus COVID-19, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voule, en comunicado de 14 de abril de 2020⁴, expresó su preocupación por la escasa o nula consulta que han hecho los gobiernos a la sociedad civil para enfrentar la pandemia, la militarización de los territorios, la restricción de derechos y señaló que:

Es inadmisibles declarar restricciones de corte general sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales (...) Convendría prever excepciones para los agentes de la sociedad civil, en especial para los que vigilan los derechos humanos, los sindicatos, los servicios sociales que ofrecen asistencia humanitaria, además de los periodistas que cubren la gestión de la crisis.

El estado de emergencia no paraliza las libertades de reunión pacífica y de asociación.

Siendo la prohibición de aglomeraciones una de las causales de restricción del derecho a la protesta, esta no es válida, porque no se puede asemejar el ejercicio de un derecho con

¹ Derecho a la vida; la prohibición de la tortura; libertad de conciencia y religión; derechos políticos y el principio de legalidad en el derecho penal no se pueden suspender en ningún caso.

² La restricción debe ser proporcional al interés que está en juego, es decir, debe tener el carácter apropiado para cumplir con su función de protección y debe ser la opción menos injerencista entre las que puedan usarse para alcanzar el resultado deseado.

³ https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19_ES.pdf

⁴ <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25788&LangID=E>



una aglomeración cualquiera, además, de mantenerse en una manifestación o reunión pacífica una distancia de 2 metros entre personas y el uso permanente de tapabocas, según el Ministerio de salud⁵, no se configuraría una aglomeración que atentara contra la salud de las personas. Por lo que las medidas de restricción del derecho a la protesta se configuran en ilegales, innecesarias y desproporcionadas.

A pesar, que la declaratoria de emergencia le dio tiempo al gobierno para “prepararse” para el pico de contagio, esta ha agudizado las problemáticas de pobreza y de violencia en el país.

El asesinato, hostigamiento y criminalización de líderes sociales sigue; las tasas de desempleo aumentan; menos jóvenes pueden acceder a la educación; el Estado desaloja personas de sus hogares; el acceso a la justicia y en general a cualquier entidad del Estado se volvió un privilegio de los que tienen internet; el Congreso ya ni se reúne; los alcaldes y gobernadores restringen derechos sin control; los niveles de desnutrición van en aumento; la corrupción se disparó por la contratación directa; todas las tardes el Presidente obliga a los colombianos a ver la realidad a su modo; los medios de comunicación no informan; y la administración, calla y obliga a quedarse en la casa a los que quieren salir a denunciar, mientras libera a los consumidores para que salgan masivamente a comprar. Por todo esto, más que nunca se debería proteger y garantizar el derecho a la protesta como única forma que tienen las personas de visibilizar la situación actual del país

⁵ Ministerio de Salud. 19 de junio de 2020. Resolución 1003 de 2020. Recuperado de [https://www.minsalud.gov.co/Normatividad Nuevo/Resolución%20No.%201003%20de%202020.pdf](https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20Nuevo/Resolución%20No.%201003%20de%202020.pdf)